

Jueves 16 de febrero de 2017.

Señores/as
Magistrados/as
Sala Constitucional

De conformidad con los artículos 73 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, los y las abajo firmantes de esta acción de inconstitucionalidad, partidarias de la democracia directa y no del impostor que ha ocupado su lugar, es decir, de la participación ciudadana (un mecanismo más para legitimar la aristocracia electiva), solicitamos que este tribunal constitucional declare la inconstitucionalidad de las resoluciones 6187-E9-2016, 8455-E9-2016 y 860-E9-2017 del Tribunal Supremo de Elecciones, relacionadas con la gestión presentada por el señor Alex Solís Fallas y otros ciudadanos con el objeto de que este Tribunal les autorice la recolección de firmas para someter a referéndum –por iniciativa ciudadana– el proyecto de ley para convocar a una Asamblea Constituyente.

Dicha petición tiene su fundamento en lo siguiente:

LEGITIMACIÓN ACTIVA

Fundamentamos nuestra legitimación activa en lo establecido en el artículo 75, párrafo segundo, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en razón de que las resoluciones 6187-E9-2016, 8455-E9-2016 y 860-E9-2017 del Tribunal Supremo de Elecciones lesionan un intereses difusos o intereses de la colectividad en su conjunto, tal como lo son la coherencia normativa, la legalidad constitucional y sobre todo, la seguridad jurídica.

Señala Joseph Raz que:

“Respecto de la naturaleza y contenido de los derechos e intereses colectivos, en donde el criterio decisivo es el bien común, entendido este concepto como el conjunto de condiciones que permiten el disfrute de los derechos humanos y el cumplimiento de los deberes que les son conexos. La **seguridad jurídica**, la justicia, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la libertad, la igualdad, la no discriminación y la procura existencial mínima para poder vivir decentemente, en suma, el conjunto de condiciones que contribuya a hacer agradable y valiosa la vida (calidad de vida), constituyen la piedra de toque del conocimiento de los derechos colectivos. (...)”

En tal sentido, el bien común no es la suma de los bienes individuales, **sino todos aquellos bienes que, en una comunidad, sirven al interés de las personas en general de una manera no conflictiva, no exclusiva y no excluyente.** 'Vivir en una ciudad bella, por ejemplo, constituye un bien para sus habitantes, y se trata de un bien común porque su goce no disminuye el de los demás y porque no puede negarse a ninguno de sus habitantes' (cf. Joseph Raz, La ética en el ámbito de lo político, Barcelona, Gedisa, 2001, trad. de María Luz Melon, p. 65)". La negrita es nuestra.

Lo anterior, en tanto los actos impugnados lesionan el derecho de toda persona a disfrutar de un grado de seguridad jurídica tal, que le permita descartar ataques violentos, con colaboración del Estado, a sus derechos fundamentales mediante modificaciones jurídicas arbitrarias.

NORMATIVA IMPUGNADA

Resoluciones 6187-E9-2016, 8455-E9-2016 y 860-E9-2017 del Tribunal Supremo de Elecciones.

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES VIOLENTADOS

Las resoluciones impugnadas violentan lo establecido en los artículos 102, inciso 9, 105, 195, inciso 8 y 196 de la Constitución Política. Tal y como se ha indicado a nivel de nuestra carta magna, la modificación total de nuestra norma de normas se da a través de un procedimiento agravado, al cual jamás puede equipararse a un proceso de referendum diseñado desde la lógica parlamentaria unicamente para cuestiones atinentes a la legalidad y no a la constitucionalidad.

HECHOS

1.- El día 13 de septiembre de 2016, mediante resolución 6187-E9-2016, el Tribunal Supremo de Elecciones autorizó la recolección de firmas para someter a referéndum -por iniciativa ciudadana- un proyecto (de ley) tendiente a convocar a una Asamblea Constituyente.

2.- Mediante las resoluciones 8455-E9-2016, del 23 de diciembre de 2016, y 860-E9-2017, del 27 de enero de 2017, el Tribunal Supremo de Elecciones ha llevado

adelante dicho trámite, siendo que ya se ha ordenado su publicación en el Diario Oficial.

FUNDAMENTOS Y DERECHO

1.- Tal como sucedió con el referéndum sobre el TLC (CAFTA) y la iniciativa popular relacionada con el Proyecto de Ley N° 17.742 (Gestión Integrada del Recurso Hídrico), los llamados mecanismos de participación ciudadana han sido utilizados en el país únicamente para legitimar proyectos político-empresariales particulares.

La utilización de las facultades del Estado en beneficio de dichos proyectos ha implicado, e implica en este caso, la enunciación de interpretaciones jurídicas que carecen de sustento legal o constitucional, siendo por ello y todas luces, arbitrarias e injustas.

Si bien la arbitrariedad y la injusticia se hallan en el origen del Estado moderno, y han llegado a naturalizarse como la característica más importante de la mayoría de sus actuaciones de hecho y de derecho, no por ello deben ser menos combatidas por quienes consideramos que el ser humano, como parte de la vida sobre este planeta, posee dinámicas que no deben ser constreñidas en favor de intereses mezquinos.

Quienes suscribimos esta acción no lo hacemos en favor de que se mantengan intacto el orden imperante, el cual como señalamos, ya de por sí constituye un sistema de dominación. Por el contrario, este recurso constituye, desde nuestro punto de vista, una denuncia más de las injusticias cometidas desde el Estado, en procura de comprobar si aún existe algo de racionalidad en el actuar de la burocracia o si por el contrario, nos enfrentamos con una aristocracia electiva que se ha transformado, abiertamente, en una dictadura.

No se debe ser muy brillante para saber que todos los derechos establecidos en la actual constitución política, que fueron ganados gracias a la lucha de millones de personas, en todo el mundo y a través de la historia reciente, quedarán en manos de quienes sean colocados estratégicamente en dicha Asamblea Constituyente.

Al final, de lo que se trata este asunto, es de que los grupos de poder en este país, quienes al final financiaran la campaña publicitaria relacionada con este referéndum, vean legitimada su necesidad de arrasar, de una vez por todas, con las pocas garantías con que cuenta actualmente la población.

Si estos grupos de poder han tomado la decisión de eliminar cualquier atisbo de derecho que exista en la actual constitución política, que lo hagan públicamente, a través de sus representantes en la Asamblea Legislativa y no mediante el engaño, aprovechando la inocencia de los pueblos.

2.- No existe norma constitucional (ni legal) que permita la realización de un referéndum tendiente a convocar una Asamblea Constituyente. Las resoluciones 6187-E9-2016, 8455-E9-2016 y 860-E9-2017 del Tribunal Supremo de Elecciones violentan lo establecido en los artículos 102, inciso 9, 105, 195, inciso 8 y 196 de la Constitución Política. Dichos ordinales establecen que esa es una atribución exclusiva de la Asamblea Legislativa, siendo que por la vía de la participación ciudadana sólo se permite la reforma parcial de dicha norma (artículos 105, párrafo tercero y 195 inciso 8 de la Constitución Política).

3.- Sobre la admisibilidad de este recurso. Tal como lo reconoció este tribunal, los referenda relacionados con la aprobación de una ley constituyen materia legislativa y no electoral.

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE AMPARO. Ciertamente, el artículo 30, inciso d), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional dispone que es inadmisibile el recurso de amparo

. Consecuentemente, en el sub-lite el aspecto medular consiste en determinar, a la luz del Derecho de la Constitución, si la organización, dirección y fiscalización de un referéndum es, , materia electoral. Sobre el particular, la norma clave de interpretación es el artículo 105, párrafos 1º y 2º, constitucional al disponer que la

y añadir que

. Bajo esta inteligencia, no cabe la menor duda que, tratándose de un referéndum para aprobar una ley, se trata, incuestionablemente, de materia legislativa y no electoral. En nada cambia la naturaleza sustancial legislativa de la materia el que el poder reformador y el legislador ordinario, le hayan encomendado al Tribunal Supremo de Elecciones la competencia de

(artículos 102, inciso 9, de la Constitución y 16 de la Ley de Regulación del Referéndum No. 8492 de 9 de marzo de 2006), puesto que, se trata de una atribución accidental o accesoria a la principal. Consecuentemente, al no tratarse de materia electoral, sino

legislativa, no cabe la aplicación de la causal de inadmisibilidad del ordinal 30, inciso d), de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. (Resolución 13313-2010, Sala Constitucional).

4.- Sobre las limitaciones al ejercicio del referéndum. Tal como también lo ha reconocido este tribunal, en la resolución citada arriba, las limitaciones al referéndum no se limitan a las establecidas en el párrafo tercero del artículo 105 constitucional, sino que abarcan, entre otras, lo establecido en el artículo 196 del mismo cuerpo normativo.

LÍMITES CONSTITUCIONALES EXPRESOS A LA POTESTAD DE LEGISLAR QUE ALCANZAN AL REFERÉNDUM. Una interpretación meramente gramatical o literal de la Constitución Política, puede llevar a concluir que el referéndum tiene como únicos límites los proyectos de ley en

que enuncia el artículo 105, párrafo 3°, de la Constitución. Empero, una hermenéutica sistemática y finalista de las normas constitucionales, conduce, irremisiblemente, a concluir que los límites a la potestad legislativa impuestos por el párrafo 1° del numeral 105, resultan, igualmente, aplicables, por identidad de razón, a los procesos de referéndum para aprobar una ley. En efecto, ese párrafo establece que la potestad legislativa está sujeta a los límites dispuestos

(Resolución 13313-2010, Sala Constitucional).

5.- Violación del principio de coherencia normativa. Prohibir la realización de referenda para la aprobación de proyectos de ley en

y permitir, al mismo tiempo, que se convoque una Asamblea Constituyente es un sinsentido, una grave contradicción, ya que una nueva constitución incluiría, necesariamente, aspectos relacionados con las materias mencionadas.

6.- Violación del principio de legalidad constitucional. El principio de legalidad constitucional junto con el de seguridad jurídica, constituyen derechos fundamentales que legitiman esta acción, pues tal como señaló en su momento Rodolfo Piza Escalante, ex presidente de esta Sala Constitucional,

. (citado por Hernández Valle, R. (1995). Derecho procesal constitucional. San José de Costa Rica: Editorial Juricentro).

Autores como Luigi Ferrajoli, describen la importancia del principio de legalidad constitucional en el esquema de derechos fundamentales, señalando que este constituye

(Ferrajoli, L. (1995). Derecho y razón: Teoría del garantismo penal. Madrid: Trotta.)

Finalmente, Esmei, al decir de Carpizo, expone que la legalidad constitucional es la , como así lo piensa Bourdeau, quien estima que

. (en Benítez Treviño, Humberto. (2015). El principio de supremacía constitucional y los derechos humanos a la luz del pensamiento de Jorge Carpizo. En Carbonell Sánchez, Miguel y otros (2015). Estado constitucional, derechos humanos, justicia y vida universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo. Derechos humanos, tomo V, vol. 1. UNAM, México D.F.)

7.- Violación del principio de seguridad jurídica. Tal como lo ha indicado esta Sala, todos, todas y cada uno, una de los habitantes tienen derecho a un grado de seguridad jurídica tal que les permita descartar ataques violentos, con colaboración del Estado, a sus derechos fundamentales mediante modificaciones jurídicas arbitrarias.

“...Reiteradamente la Sala ha indicado que la seguridad jurídica es un principio constitucional que en su sentido genérico consiste en la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad, protección y reparación: es la situación del individuo como sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, que sabiendo o pudiendo saber cuáles son las normas jurídicas vigentes, tiene fundamentales expectativas de que ellas se cumplan. Ese valor jurídico pretende dar certeza contra las modificaciones del Derecho, procura evitar la incertidumbre del Derecho vigente, es decir, las modificaciones jurídicas arbitrarias, realizadas sin previo estudio y consulta. Puede ser considerada tanto en sentido subjetivo y objetivo, pero ambos están indisolublemente vinculados; en su sentido subjetivo es la convicción que tiene una persona de que la situación de que goza no será modificada por una acción contraria a los principios que rigen la vida social y en

sentido objetivo se confunde con la existencia de un estado de organización social, de un orden social. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos positivos existen normas que pretenden dar cumplimiento al valor de la seguridad jurídica; en el nuestro tenemos varias expresiones de ese principio tales como la presunción del conocimiento de la ley, el principio de la reserva o legalidad penal, el principio de irretroactividad de la ley, la cosa juzgada y la prescripción, entre otros. (Resolución 267-2012, Sala Constitucional).

PETITORIA

De conformidad con lo expuesto, solicitamos:

1.- Se declare la inconstitucionalidad de las resoluciones 6187-E9-2016, 8455-E9-2016 y 860-E9-2017 del Tribunal Supremo de Elecciones (relacionadas con la gestión presentada por el señor Alex Solís Fallas y otros ciudadanos con el objeto de que este Tribunal les autorice la recolección de firmas para someter a referéndum –por iniciativa ciudadana– el proyecto de ley para convocar a una Asamblea Constituyente) por ser contrarias a los artículos 102, inciso 9, 105, 195, inciso 8 y 196 de la Constitución Política.

NOTIFICACIONES

Para notificaciones señalamos el correo electrónico resistenciayautonomia@googlegroups.com

Esperanza Tasies Castro
Cédula de identidad N° 7-0067-0374

Firma, Sello y Timbres:
Carlos Alberto Campos Mora
Cédula de Identidad N° 1-1236-0739
Teléfono: 8713-7700 / 2255-3151
Correo electrónico: licenciadocarloscampos@gmail.com
Carnet Colegio de Abogados: 19597